

El transporte público gratuito se expande en Francia

En el caso de Aubagne, la idea surgió durante la campaña electoral municipal, la comuna de Aubagne implantará la gratuidad de su transporte público en todo su término municipal a partir de 2009. En total serán 11 localidades y más de 93.000 ciudadanos los que se beneficiarán de esta medida a la vez social y medioambiental.

Los responsables políticos revelan que la recaudación proveniente de los billetes emitidos representa menos del 9% del presupuesto anual de transportes el cual asciende a 9 millones de euros. Con estas cifras resulta más positivo aumentar el número de usuarios y “limpiar” el ambiente que seguir perdiendo dinero.

Tampoco hay que olvidar el coste de la emisión de billetes, del control de los mismos etc. Finalmente, los sobre costes de la gratuidad se estiman en 700.000 euros, cantidad que la comunidad está dispuesta a asumir con la posibilidad, en última instancia, de aumentar la tasa a las empresas de transporte del 0,6% al 1% si la población alcanza los 100.000 habitantes. El montante de dicha tasa pasaría de 3 a 5 millones de euros. Con esta medida de gratuidad, los responsables políticos esperan conseguir por una parte aumentar el número de usuarios del transporte público y por otra, hacer sitio a una nueva red de carriles que se piensan construir dentro de un plan general de transportes limpios y sostenibles.

La ciudad de Compiègne, al norte de París, fue pionera hace 33 años y continúa extendiendo progresivamente la gratuidad de los transportes en el conjunto de su aglomeración desde 2005.

En Châteauroux, la medida fue aplicada en la totalidad de la comunidad de 75.000 habitantes desde su instauración en 2001. Después de un año de experimentación, pasó a ser fija en mayo de 2002.

El sindicato Unión Transportes Solidarios apoya la decisión de la municipalidad de Aubagne de instaurar la gratuidad del transporte público urbano en el primer semestre de 2009.

Después de Gap, Compiègne y más recientemente Noyon, otra nueva comunidad se suma al proyecto.

“Es una decisión igualitaria pues permitirá a todos poder desplazarse. Igualmente es una decisión medioambiental porque disminuirá el uso del vehículo particular y por consiguiente la contaminación. Es evidente que el funcionamiento del transporte público no se basa solamente en la venta de billetes, necesita la participación de colectividades locales. Y lo que ocurre muchas veces es una gran empresa o grupo empresarial se encarga de gestionar los servicios y resulta siempre el mayor beneficiario. Como viene siendo cada vez más habitual en los servicios del agua, los municipios tienden a suprimir a este intermediario. Se trata de dar la posibilidad a los usuarios de acceder a un transporte que ellos mismos financian con sus impuestos”, se comenta desde el sindicato.

Fuente

Compartir

(fin del artículo)